

15M: Los ciudadanos, a las puertas

Enrique Dans¹

La secuencia de acontecimientos que se desencadenaron en España a partir del 15 de mayo de 2011, sus orígenes, su desarrollo y sus posibles consecuencias revelan un cambio profundo en la forma de organización de la sociedad y en las mecánicas del poder: una democracia ideada para una sociedad configurada de manera unidireccional se muestra incapaz de dar respuesta a una en la que los ciudadanos, gracias al uso de herramientas tecnológicas ampliamente implantadas, pueden expresarse y coordinarse libremente. Aunque aún es muy pronto para analizar las posibles consecuencias del movimiento 15M, parece claro que su aparición y desarrollo constituye una señal de cambio poderosa para todas las democracias: las exigencias de cambio de los ciudadanos no se limitan a movimientos insurgentes en países con regímenes dictatoriales, sino que pueden extenderse a países con tradiciones democráticas perfectamente consolidadas. Ante una democracia en la que la brecha entre la “clase política” y los ciudadanos parece aumentar progresivamente, la tecnología empieza a marcar tendencias que los políticos no van a poder ignorar.

Resulta imprescindible, de cara a un análisis del movimiento 15M, encuadrarlo en varios acontecimientos que lo preceden. El primero de ellos es el desarrollo de un creciente ciberactivismo en España, una corriente de oposición plasmada en la red alrededor de cuestiones que van desde la tarifa plana a la neutralidad de la red, pasando por temas como el software libre, la LSSI, los derechos de autor, el nombramiento de Ángeles González-Sinde como ministra de Cultura, las patentes de software o el canon digital.

A finales del año 2009, la introducción irregular y subrepticia de una disposición final en el proyecto de ley de Economía Sostenible da origen a la llamada “ley Sinde”, que se convierte automáticamente y por derecho propio en la heredera de toda la frustración acumulada por años de indiferencia de los políticos ante las opiniones de los ciudadanos en la red. En pocos días, esta ley agrupa a un nutrido grupo de personas en la red que engloba a periodistas, abogados, empresarios y profesores, que durante unas horas de la noche redactan en un documento compartido un “Manifiesto por los derechos fundamentales en la red”, que es reproducido por decenas de miles de páginas al día siguiente. Tras el correspondiente revuelo, varios de esos autores son convocados a una reunión con la ministra de Cultura, en la que se hace patente la ausencia de voluntad negociadora.

Cuando esta misma “ley Sinde” es aprobada, los ciudadanos españoles pueden ver a los tres partidos mayoritarios (Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y

¹ Enrique Dans es profesor de Sistemas de Información en IE Business School. Correo electrónico: enrique.dans@ie.edu

Convergencia i Unió), representando teóricamente a cerca de un 80% del electorado, pactando para aprobar al coste que fuese una ley de enorme impopularidad entre la ciudadanía, a la que la grandísima mayoría se oponía. Finalmente, tras múltiples manifestaciones en todos los sentidos, el Partido Popular decidió inclinarse por apoyar la postura del gobierno y del lobby de los derechos de autor, y aceptar todo aquello que le pusiesen delante a cambio de alteraciones mínimamente cosméticas en el texto. Como justificación, utilizó la teoría de que “a la red no hay que hacerle caso: aunque hagan mucho ruido, no son capaces de trasladar la protesta a la calle porque en realidad son cuatro gatos”.

Era, sencillamente, la escenificación de una traición, la evidencia de que los partidos defendían los intereses de los lobbies de los derechos de autor y de las grandes industrias norteamericanas que, como se había revelado semanas antes en los famosos cables de *WikiLeaks*, habían presionado al gobierno para obtener una legislación más favorable.

El pacto que llevó a la aprobación final de la “ley Sinde” fue el detonante definitivo de lo que algunos llegaron a denominar la *#SpanishRevolution*: una chispa de rebeldía que evidenció la necesidad de un cambio, aunque ese cambio ya no tenía nada que ver con la “ley Sinde”, sino con factores infinitamente más importantes. Pero su valor como detonante fue indudable, porque permitió dar salida a un elevadísimo nivel de frustración larvado durante años. En ese sentido, la ministra de Cultura se convirtió, a todos los efectos, en la que encendió la mecha del movimiento 15M.

Precisamente en ese clima surgió la iniciativa *#nolesvotes*. La idea fue, utilizando el elevadísimo nivel de frustración social surgido en torno a la “ley Sinde” como enésima prueba del desprecio de los políticos a la voluntad de los ciudadanos expresada en la red, abrir el paraguas de la reivindicación para, en lugar de limitarse a reclamar una seguramente inviable vuelta atrás, atacar el problema de raíz apuntando como responsable a la falta de calidad democrática que permitió que la “ley Sinde” fuese tramitada. En realidad, la “ley Sinde” se debía a factores de fondo que toda la ciudadanía tenía claramente identificados: corrupción, partidocracia, ausencia de controles ciudadanos y una clase política alejada y aislada a la que los ciudadanos no elegían. Una ley electoral que pone la elaboración de las listas en manos del líder del partido y que no permite el establecimiento de vínculos entre representantes y representados. Una democracia teóricamente representativa pero que no representa, no permite exigir responsabilidades, no responde a las mismas y favorece el desarrollo de partidos no democráticos, burocráticos, ineficientes y cuajados de clientelismo y corrupción.

El otro factor de fondo que permite entender el contexto de las movilizaciones del 15M es, claramente, la llamada “primavera árabe”. Las revueltas en rápida sucesión de regímenes dictatoriales como Túnez y Egipto, acompañadas de las correspondientes réplicas más o menos exitosas en países como Yemen, Marruecos, Siria o Libia se convirtieron en una clara demostración de que la web, y fundamentalmente herramientas de comunicación como los blogs, *Twitter* o *Facebook*, podían convertirse en un factor catalizador de movimientos sociales.

La web social y la televisión por satélite fueron capaces de alterar la ecuación de comunicación en dictaduras que se sostenían gracias a un férreo control de medios como la prensa, la radio o la televisión, todos ellos fundamentalmente unidireccionales. De países en los que los ciudadanos se informaban a través de medios de comunicación que pintaban una realidad paralela en la que no existía rebeldía ni insurgencia de ningún tipo, pasamos en

muy poco tiempo a entornos en los que los ciudadanos podían sintonizar *Al Jazeera* y ver lo que pasaba en otros países, leer blogs que resultaba casi imposible controlar, a integrarse en grupos en *Facebook* que mostraban signos de rebeldía contra el sistema establecido y anunciaban acciones, o a comunicar consignas y coordinarse en *Twitter*.

La actuación de Ben Alí en Túnez y de Mubarak en Egipto encarcelando bloggers e intentando restringir el acceso a determinadas herramientas de la red o a Internet en su conjunto dejan clara la influencia que estos medios ejercieron en las revueltas: a pesar de ser países con un nivel de acceso a la red no excesivamente generalizado - más en el segmento joven y en la población urbana, pero relativamente poco significativo, - Internet se convirtió en la prueba de que “había otra realidad”. Las personas empezaron a comentar cosas que habían visto en la red y las evidencias de que había una incipiente insurgencia y una esperanza de cambio fueron creciendo, hasta convertirse en una olla a presión a la que sólo le faltaba un detonante. En el caso de Túnez, la chispa llegó con el suicidio de Mohammed Bouazizi tras ser tratado de manera vejatoria por la policía. Los dictadores perdieron primero el control de la comunicación interna, dentro del país, y después el de la comunicación externa: a medida que la información fluía hacia las poblaciones emigrantes en otros países y se movía a nivel internacional, las posibilidades de recibir apoyo de potencias extranjeras como Francia, en el caso de Túnez, o los Estados Unidos, en el de Egipto, disminuían. Para esos países, proporcionar apoyo a una dictadura cuyos excesos se exhibían impudicamente ante los ojos de la comunidad internacional sin que ninguna censura pudiese evitarlo tenía un coste político excesivamente elevado.

Sin apoyo externo y con plazas públicas convertidas en símbolos de la revolución, los dictadores norteafricanos fueron cayendo como fichas de dominó. Pero como cabía esperar, el efecto disruptor de la tecnología no terminó ahí. Las concentraciones organizadas por un pequeño grupo de jóvenes a través de *Facebook* en Portugal dieron lugar al movimiento *Geração À Rasca*, que culminó en una masiva manifestación en marzo de 2011. Era la prueba que faltaba: en países con democracias asentadas desde hacía más de treinta años, el descontento también acababa utilizando las herramientas de la red para materializarse en la calle.

A España, las evidencias llegaron en un momento en el que el movimiento *#nolesvotes* ya caminaba solo. El manifiesto inicial había probado que respondía a demandas genuinas: el mismo día de su publicación, al hilo de la consigna “no propongás, haz”, surgieron más de cincuenta agrupaciones locales, un wiki colaborativo y todo tipo de lemas, acciones, logotipos, pegatinas, carteles y hasta vídeos cuidadosamente editados. La potencia de la red, aplicada a un fin común. Tras las primeras consignas en medios utilizadas para acallar la curiosidad de buenos profesionales curiosos, algunos políticos comenzaron a reaccionar. Lo hicieron intentando desacreditar el movimiento: pretendiendo hacerlo pasar por un movimiento pro-abstención, apuntando a supuestas conspiraciones y “manos negras” que lo conectaban con partidos y organizaciones de todo tipo y hasta lanzando descalificaciones personales contra los que ellos suponían que eran sus “líderes”, llegando a los límites más demenciales de la conspiranoia que afirmaba que pertenecían a oscuras sectas, al Club Bilderberg, a los Illuminati o que pretendían instaurar un Nuevo Orden Mundial.

Al tiempo, empezaron a surgir grupos como *Malestar.org*, *JuventudSinFuturo* o *DemocraciaRealYA*, con la idea clara de promover el activismo en la calle. Las protestas comenzaron a hacerse visibles con las manifestaciones periódicas de los primeros, siguieron

materializándose con los más de tres mil jóvenes que concentraron en Madrid los segundos y culminaron con las entre treinta y cuarenta mil personas de los terceros.

El movimiento ha seguido en todo momento una pauta puramente social, con una muy escasa coordinación; las acampadas, que surgieron tras el final de las primeras manifestaciones, no estaban originalmente previstas. En realidad, se debe en parte a la euforia de las primeras demostraciones en la calle, unida a la reacción ante la represión policial, y llevadas por la idea de mantener el pulso informativo, aspecto en el que fueron enormemente eficientes. Las asambleas que se organizan para recuperar el diálogo político y plantear el tipo de sociedad hacia la que algunos pretenden evolucionar se encuentran, de repente, con un súbito interés mediático que las acusa de estar instrumentalizadas por la izquierda, de ser un supuesto “complot fraguado por un partido para influir en las elecciones del mismo modo que ocurrió hace dos legislaturas con los atentados en los trenes”, de estar protagonizadas por jóvenes ociosos y de estética hippie. El calificativo “perroflauta” irrumpe con fuerza en el panorama, mientras determinados medios se afanan por tomar cualquier propuesta carente de representatividad y elevarla al rango de credo del movimiento para demostrar su teoría de la manipulación. Se alimenta el tópico de que las acampadas “huelen mal” y “están llenas de chinches, ratas y cucarachas”, a pesar de las metódicas pautas de limpieza llevadas a cabo por la mayoría de los ocupantes de las plazas, así como de hipotéticos perjuicios millonarios al comercio de la zona para los que nadie ha presentado dato ni evidencia alguna. Por supuesto, ni las acampadas son perfectas, ni pretenden sustituir a la democracia con propuestas programáticas surgidas de reuniones en la plaza: el papel es tan sencillo como constituirse en puntos de atención mediática, concienciar a los ciudadanos de que pueden hablar de política y extender la idea de la participación.

Una semana antes de que las acampadas empiecen a retirarse, dos estudios, el Barómetro de Metroscopia en *El País* y el Barómetro de primavera del GESOP en *El Periódico*, refrendan el dato de que una amplísima mayoría de la población se identifica o apoya a los llamados “indignados” y tiene sentimientos positivos hacia un movimiento que supone toda una corriente de aire fresco en la política española. Mientras, la atención internacional mantiene sus ojos puestos en las plazas españolas: se asume que un movimiento de ese tipo, surgido en una democracia relativamente madura, es susceptible de replicarse en prácticamente cualquier país occidental en cuanto se den las condiciones adecuadas para ello. De hecho, Grecia replica el movimiento con una primera manifestación en la Plaza Syntagma el día 26 de mayo repleta de referencias al movimiento español y continúa con concentraciones cada vez más masivas en el mismo punto.

La reflexión final parece clara: el movimiento 15M es achacable, fundamentalmente, a la situación de crisis económica, falta de expectativas y elevada tasa de desempleo imperantes en la sociedad española, situación de la que se hace responsable a una clase política que gestiona los recursos, no en función del bien común, sino de su interés por perpetuarse en el poder. La reacción se ve catalizada por un creciente activismo en la red y toma cuerpo en un estrato social de jóvenes en los que coincide un elevadísimo nivel de desempleo (superior al 40%) y una penetración de conectividad y de uso de herramientas de la web social prácticamente ubicuo y es alimentada por la falta de reacción de los políticos o, incluso, por las acciones de represión policial sobre ciudadanos pacíficos que tienen lugar en ciudades como Barcelona, Lleida, Valencia, Madrid o Salamanca.

El mensaje de fondo es que el movimiento de indignación cristaliza en una serie de peticiones, en un consenso de mínimos que resume medidas de regeneración democrática,

algunas de las cuales precisan de cambios y reformas drásticas en el ordenamiento político: una nueva ley electoral, políticos transparentes, preparados y no corruptos, separación efectiva de poderes y controles ciudadanos para la exigencia de responsabilidad política. El movimiento, que cumple su primer mes de vida en el momento de cerrar este texto, no se ha debilitado lo más mínimo: todo apunta a que las siguientes manifestaciones tendrán convocatorias notablemente más nutridas todavía, y que la presión social sobre una clase política por el momento incapaz de reaccionar va a ir progresivamente incrementándose, no disminuyendo. Ante el impacto de la disrupción tecnológica, la gran mayoría de las industrias han sido históricamente incapaces de reaccionar: habitualmente, la reacción proviene de un nuevo entrante o competidor que rompe las reglas establecidas. Considerando la política como una industria en la que todos los ciudadanos son accionistas, esto anticipa que los partidos tradicionales van a mostrarse igualmente incapaces de reaccionar y que tal reacción debería provenir de un nuevo entrante o de una nueva situación que emergiese de un proceso reformador o constituyente.

En este momento, resulta demasiado pronto para anticipar las consecuencias. Lo que sí es evidente es que la tecnología ha servido para generar una sociedad mucho más conectada y bidireccional, que exige reformas en la democracia que conocieron sus padres. De una gestión que había consolidado a una “clase política” cada día más peligrosamente parecida a la corte de Versalles, pasamos a ciudadanos comprometidos y que exigen sentirse representados, proximidad a las decisiones, transparencia y garantías. La situación ha cambiado y los políticos todavía no han tomado conciencia de ello.

Los ciudadanos están a las puertas.